

Editorial

Crónicas de la resistencia en Guatemala. Un proceso de rearticulación comunitaria

Para Pancho Lartigue, *in memoriam*



Barillas, concentración por la paz.
Foto: Santiago Bastos.

Guatemala está asistiendo a un momento importante de organización comunitaria, que se aprecia en la movilización en defensa del territorio contra las actividades extractivas. El Estado ha respondido actualizando las formas de represión supuestamente abandonadas con el fin del conflicto armado interno. La importancia política de este proceso motivó la formación del Equipo de Comunicación y Análisis Colibrí Zurdo, que se ha dedicado a documentar, difundir y analizar los hechos concretos y las implicaciones de estas dinámicas. Las páginas que siguen provienen del trabajo colectivo de investigación y reflexión de este equipo.

Dr. Santiago Bastos Amigo

Profesor-Investigador del CIESAS-Occidente
santiago@ciesas.edu.mx



Barillas, concentración por la paz.
Foto: Santiago Bastos.

Barillas, 1 de mayo de 2012

El día 1 de mayo de 2012, en Barillas —población situada en el extremo noroccidental de Guatemala— los campesinos q'anjob'ales Andrés Pedro Miguel, Esteban Bernabé Mateo y Antonio Pablo fueron baleados por personal de seguridad de la empresa Ecoener Hidralia Energía. El primero murió y los otros dos quedaron gravemente heridos. El atentado fue seguido de una declaratoria de un estado de sitio parcial en la zona por parte del gobierno, que terminó con la detención ilegal de 12 personas y la orden de captura de otras 23. Casi todas ellas son líderes de la lucha que desde 2008 mantienen varias comunidades de este municipio en contra de la intención de la mencionada empresa de abrir una central hidroeléctrica.

Después de ocho meses de prisión, los líderes retornaron a sus casas al no poder demostrarse las acusaciones que se les hicieron. Pero hoy, dos de ellos están de nuevo presos por otros delitos que tampoco han cometido, mientras los responsables de la muerte de Andrés Pedro están libres. Pese a todo, la resistencia pacífica por parte de estas comunidades se ha mantenido, de tal forma que la empresa no ha podido empezar sus actividades.

Este relato no es extraño en estos tiempos en Guatemala. Nombres como San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, Cotzal y Cunén, Totonicapán, Livingston, La Puya, San Juan Sacatepéquez, el valle del Polochic, San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Monte Olivo, Lanquin... y muchos más aluden a casos en que la oposición a la instalación de mineras, hidroeléctricas, cementeras, agrocombustibles, empresas de tendido eléctrico y megaproyectos ha sido respondida con represión, juicios, militarización y muerte, pero se mantienen y crecen.

La defensa del territorio

Hechos similares están ocurriendo en toda América Latina desde el cambio de siglo, cuando la búsqueda desenfrenada de recursos naturales asentó en la región un extractivismo variado, pero siempre depredador (Garibay, 2010). En Guatemala, la apertura del país a la economía global, se convirtió en el eje de la política económica y “de desarrollo” de los sucesivos gobiernos (Solano, 2005; Yagenova, 2012). Esto amenazó de forma directa los espacios de la vida cotidiana sobre los que se estaba reconstruyendo esa vida comunitaria después de años de guerra y masacres, en medio de la migración, la pobreza y el miedo. Quizá por ello, la respuesta ha sido clara y contundente.

Así lo mostraron las “consultas comunitarias de buena fe” y “consultas de vecinos” desarrolladas desde 2005 en unos 65 municipios del país (20% del total), movilizándolo casi a un millón de personas (en un país de 15 millones de habitantes). En cada lugar, con una participación abrumadora, manifestaron su negativa a que en su territorio se instalaran estas actividades. Estos resultados fueron posibles porque “las consultas” supusieron todo un ejercicio de mecanismos comunitarios de información, debate y decisión mediante las instancias comunitarias, con participación de todo tipo de liderazgos: maestros, catequistas, pastores, exguerrilleros, expatrulleros, migrantes, y mujeres, muchas mujeres y niños (Camus, 2008; Rasch, 2012; Trentavizzi y Cahuec, 2012; Bastos y de León, 2014).

En este momento de la posguerra, dichas consultas fueron un mecanismo por medio del cual comunidades —sobre todo indígenas, pero también mestizas y mixtas— buscaron utilizar los mecanismos políticos vigentes para ejercer su derecho a defender lo poco que les quedaba. Pero ninguno de los

gobiernos ha dado validez alguna a estos ejercicios masivos de ciudadanía. Por el contrario, desde 2004 es evidente el apoyo irrestricto a todo lo que tenga que ver con inversión extranjera en proyectos mineros y energéticos. Eso no sólo ha significado leyes específicas, tratados internacionales o apoyo político desde los tres poderes del Estado. Sobre todo, ha supuesto poner nuevamente en marcha la maquinaria represiva para defender los intereses de las empresas y sus socios y aliados.

Desde que en 2003 la gigantesca corporación canadiense GoldCorp instaló la mina Marlin en el departamento suroccidental de San Marcos, en todos los lugares donde empresas extranjeras o nacionales han llegado con la intención de poner en marcha actividades extractivas, se han producido conflictos que han llevado a la población afectada y, en general, a las comunidades, a organizarse contra ellas. Lo han hecho, de nuevo, poniendo en marcha mecanismos de participación comunitaria, que en este ejercicio se ven reforzados y muchas veces transformados. A pesar del uso de mecanismos y vías legales, la violencia en diversos grados ha sido la respuesta tanto por parte de las empresas como del Estado. Amenazas, intimidaciones y agresiones sexuales, estados de sitio y prevención, militarización y terror, cargas policiales y desalojos, heridos y muertos, procesos judiciales y presos políticos son las caras de esta respuesta.¹

Movilización y rearticulación de las comunidades

Esta defensa del territorio se inscribe dentro de un proceso más amplio de búsqueda de participación política basada en los espacios y comportamientos comunitarios. En el contexto de posguerra, ineficacia y despojo, ha habido lugares donde la gente se ha reorganizado para llevar a cabo muchas de las tareas que el Estado se negaba a cumplir como le correspondía, y para enfrentar amenazas de diverso tipo. En ellos, “la comunidad” se ha rearticulado como espacio de participación y organización política, actualizando un comportamiento y unas instituciones históricas. Fueron sobre todo comunidades mayas del altiplano occidental, pero también estuvieron presentes la xinkas del oriente y otras mestizas distribuidas por el país.

Esto no significa que todas las localidades guatemaltecas entraran en este proceso; pero en aquellos lugares en que ha habido organización, en buena parte ha sido a partir de

unos comportamientos e instituciones que podemos considerar comunitarias: se defiende aquello que se considera común alrededor de unas instituciones y personajes que representan esta *comunitariedad*, y la voluntad colectiva se pone por encima de lo individual. Una frase de un joven de Barillas representa esta idea:

Cuando alguien es autoridad en la comunidad y si uno le exige, él tiene que levantarse. Así es lo que hicimos nosotros: le dijimos a ellos que se levantarán, que dijeran “no”, y ahí vamos nosotros detrás. Ellos no querían, porque ellos sabían en qué problemas se iban a meter, pero como nosotros les exigimos, entonces sí, tuvieron que meterse con todo.²

Esta dinámica de nuevas articulaciones comunitarias se aprecia en diferentes procesos que se han venido dando a la vez y sucesivamente, y convive con las formas de participación y representación del sistema político oficial. Dichos procesos no están exentos de luchas de poder, intereses personales o violencias internas, pero cuando se dan es dentro de una lógica comunitaria.

En algunas localidades del altiplano maya están recreándose algunas de las instancias que se habían forjado a lo largo de la historia como formas del gobierno territorial de las comunidades y que en los años setenta y ochenta perdieron importancia. Al calor de los planteamientos de los derechos de los pueblos indígenas que marcaron los años noventa del siglo pasado, y de los cambios políticos del fin de siglo, estas instancias fueron resucitadas, transformadas o directamente creadas, normalmente como “alcaldías indígenas”. Buscaban servir de espacios de participación y representación y asumir tareas históricas —como la impartición de la justicia indígena (Sieder y Flores, 2012)— desde la calidad de pueblos mayas.

Quizá el caso más conocido es el de la Asociación de los 48 Cantones de Totonicapán, que pasó de ser la institución que históricamente había manejado el agua y el bosque de este municipio a presentarse como la “representación del pueblo k’iche’ de Chwimekena”, manteniendo una importante legitimidad local y logrando gran presencia nacional (Ekern, 2011). Como ésta han surgido y resurgido un par de docenas de nuevas “alcaldías” y estructuras similares por todo el país —incluso en comunidades de colonización y reasentamiento y localidades mestizas

¹ Se ha dado una progresión continua de las agresiones reportadas contra defensores de derechos humanos: 128 en 2004, 278 en 2006, 352 en 2009, 409 en 2011 y 657 en 2013. Este año se perpetraron 18 asesinatos contra defensores de derechos humanos, un incremento de 72% respecto a los 13 del año previo. Durante 2013 se registraron 61 denuncias judiciales montadas contra defensores de derechos humanos (Unidad de Defensa los Defensores de Derechos Humanos Udefegua: El Acompañante, febrero de 2014, disponible en <<http://www.udefegua.org/images/acompanante>>

² Entrevista realizada en Barillas, Huehuetenango, 18 de junio de 2012.

y supuestamente ladinizadas—, unificadas ahora en el Gran Consejo Nacional de Autoridades Ancestrales.

En otros lugares, las instancias político-administrativas reformadas en los acuerdos de paz para asegurar la representación local, como los comités comunitarios de desarrollo —Cocodes—, las alcaldías comunitarias o indígenas —antes llamadas alcaldías auxiliares— y las asambleas comunitarias, también fueron apropiadas para darles este sentido de espacio comunitario de participación, en vez del último peldaño de la pirámide clientelar que se les asignó en el nuevo régimen (Bastos y de León, 2014). De hecho, así como en muchos lugares los Cocodes han sido la base de las consultas y otras formas de movilización, en otros forman parte de la red de corrupción o son la punta de lanza en contra de esta rearticulación.

Éstos son los espacios e institucionalidad sobre los que se han organizado las movilizaciones contra las actividades extractivas diversas. Su funcionamiento se complementa en los espacios locales con una densa red de participación que en conjunto dan forma a la vida comunitaria —comités de agua y servicios, equipos de fútbol, asociaciones de padres de alumnos, grupos de mujeres, grupos en pro de la cultura maya, bases de organizaciones campesinas, etcétera—, que se están convirtiendo en espacios de una participación política que rebasa lo local.

La Guatemala posconflicto

Esta movilización se está dando en un momento histórico muy concreto, que marca los acontecimientos y lo dota de un especial significado: ocurre después de casi medio siglo de un conflicto armado interno que tuvo su punto culminante en las masacres perpetradas por el ejército guatemalteco contra comunidades indígenas mayas a comienzos de los años ochenta del siglo pasado. Ese conflicto —y sobre todo el genocidio que lo acompañó— llevó a un total de 200 000 muertos y desaparecidos, 83% de ellos mayas (CEH, 1999), en lo que supone la mayor matanza de indígenas en el siglo XX en Latinoamérica.

Las comunidades mayas del altiplano guatemalteco sufrieron en esos mismos años una serie de cambios que —como en toda América Latina— dieron paso a las primeras expresiones de lo que después serían los movimientos indígenas. El contexto de la Guerra Fría, el anticomunismo y la represión —unidos al pensamiento oligárquico

y el racismo— impidieron el desarrollo de sus propuestas de inserción en la vida guatemalteca como fuerzas políticas indígenas (Casaus, 2008). Por el contrario, el éxito de la movilización y su alianza con las fuerzas revolucionarias en algunos lugares fueron castigados con la represión selectiva, la tierra arrasada y con una década y media de militarización (Bastos, 2013).

El proceso de paz que culminó en 1996 fue impulsado en buena parte por las mismas comunidades, organizadas alrededor del movimiento revolucionario o de los entonces potentes movimientos indígena, campesino, de mujeres y otras expresiones de lo que se llamó *sociedad civil*. El objetivo era poner las bases de una sociedad que acabara con las causas y los efectos de este medio siglo de conflicto: la desigualdad y el racismo, la militarización, la violencia y el autoritarismo.

Sin embargo, a casi veinte años de la firma de aquel acuerdo, los resultados parecen haber sido otros (Torres Rivas, 2013). El fin del conflicto armado tomó a las comunidades exhaustas y a las fuerzas populares y de izquierda desarticuladas ante este nuevo ciclo político. Esto permitió a la oligarquía retomar el control directo sobre la política del país, ahora sin el estigma del autoritarismo militar y contando con todo el apoyo internacional para desarrollar políticas neoliberales que encajaban muy bien con su pensamiento criollo.

Por eso no se consolidaron los procesos políticos que se habían delineado —de hecho, ni siquiera se aprobaron los cambios constitucionales que surgieron de los acuerdos de paz— y, como hemos visto, las élites se lanzaron a la inserción del país en un mercado internacional marcado por la globalización, en vez de buscar las bases sociales y productivas de la sociedad.³ Álvaro Arzú, miembro de una prominente familia criolla, fue el presidente que firmó la paz y ratificó el Convenio 169 de la OIT, pero también fue quien promovió en 1997 los cambios a la ley de minería que abrieron el país a las empresas transnacionales del ramo (Bastos y de León, 2014).

De esta manera, para la mayoría de la población, la posguerra se ha caracterizado por la entrada de lleno en las facetas más excluyentes de la globalización, de la mano del neoliberalismo criollo. Cuando la maquila, los cultivos de exportación y el impulso al turismo no resolvieron las necesidades más inmediatas de las familias pobres, la migración internacional formó parte de la vida de

3 El porcentaje de población en pobreza extrema en 2011 era de 13.33%, mientras que el correspondiente a pobreza no extrema llegaba a 40.38% (INE, 2011). Guatemala ocupa el puesto 133 en el *Informe sobre Desarrollo Humano 2013* (IDH, PNUD, 2014). “Aunque ha logrado mejorar el ingreso per cápita de sus habitantes, el país mantiene una alta desigualdad que impide mejorar la calidad de vida de su población. Debido a lo anterior, Guatemala está casi en el último lugar en indicadores sociales, sólo superando a Haití” (*El periódico*, 15 de marzo de 2013).



Autoridades indígenas de San Juan, Sacatepequez.
Foto: Nelton Rivera.

los guatemaltecos, de tal manera que en quince años más de 10% de la población tuvo que buscarse la vida en “el norte” promisorio.⁴

“La violencia” regresó a la cotidianeidad y las primeras planas, ahora en una forma difusa de múltiples caras ubicuas —maras, extorsiones, secuestros, linchamientos, narcotráfico, zetas, muertos en las cunetas, limpieza social— que hizo que en 2007 se llegara a los niveles de homicidios de la década de los ochenta y Guatemala volviera a aparecer en los lugares estelares de las estadísticas de la muerte.⁵

Los beneficios de la democracia tampoco llegaron. Con un poder militar que se rearticuló y diversificó, y un control directo por parte de las élites económicas, las elecciones fueron perdiendo sentido, los partidos se fueron desacreditando y “la política” se ha separado de las necesidades de la gente, ahora forma parte de la vida cotidiana en su componente de corrupción y abuso, de clientelismo e impunidad.

Comunicación y análisis como tarea política

Por todo lo anterior, la rearticulación comunitaria a la que asistimos no es sólo un asunto de reflexión académica o de análisis político, es algo en lo que mucha gente se ha estado jugando su futuro, y ha puesto mucho de su parte, creando un proceso en que estas comunidades representan la esperanza y la energía creativa en una Guatemala que se hunde en una posguerra sin futuro. Con esa idea nos reunimos desde 2011 un grupo de personas que veníamos de experiencias diversas alrededor de los movimientos populares: como militantes de izquierda, trabajos en

ONG, la academia, el análisis político y el feminismo; buscamos crear una forma de trabajo que sirviera para apoyar, desde nuestras capacidades, la movilización comunitaria que veíamos, sin los vicios de todas nuestras experiencias previas.

El reto que nos planteamos fue hacer un trabajo político usando como herramientas la comunicación y el análisis que sabíamos hacer, tanto para entender la lógica que regía el comportamiento comunitario como para romper el monopolio informativo que —como fuimos corroborando— era un factor fundamental de la criminalización de estas protestas.

Así se consolidó un grupo que tomó el nombre de Equipo de Comunicación y Análisis Colibrí Zurdo, formado por Quimiy de León, Nelton Rivera, Francisco Pablo, Cristina Chiquin, Dania Rodríguez, Javier de León y quien esto escribe. El CIESAS intervino en la iniciativa mediante el proyecto de investigación “Movilización comunitaria en la Guatemala neoliberal. Proceso de sistematización de experiencias de organización”, como parte de lo que en su momento se llamó Programa Guatemala, en el que contribuyeron François Lartigue (q.e.p.d.), a quien recordamos con cariño, y El canche, Roberto Melville (CIESAS-DF), con un interesante diplomado con la Universidad Rafael Landívar, que ya va para la segunda generación.

En el trabajo de sistematizar información, armar redes y pensar métodos, la urgencia nos ganó cuando la represión y la criminalización se tuvieron que convertir en temas tan importantes, o más, como esa movilización que había alentado nuestras esperanzas. El trabajo se hizo más complejo y el análisis

4 La OIM (2012) calcula que para 2010, 11.4% de la población de Guatemala residía en Estados Unidos.

5 “Para 2008, Centroamérica registró una tasa promedio de 33 homicidios por 100 000 habitantes, tres veces más en comparación con la tasa mundial y siete puntos por encima del promedio que se registra en América Latina. La situación es entre tres y seis veces mayor en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala)” (PNUD, 27 de octubre de 2009, disponible en <<http://www.undp.org.pa/centro-informacion/comunicados/centroamerica-se-ha-convertido-en-la-region-del-mundo-con-mayor-violencia/3>>.

Para 2013, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) daba una cifra de 6 072 homicidios, lo que suponía que la tasa había aumentado a 39.3 homicidios por 100 000 habitantes (disponible en <<http://www.elfaro.net/es/201401/internacionales/14364>>).



Autoridades comunitarias de Barillas.
Foto: Santiago Bastos.

tuvo que supeditarse a las necesidades de los abogados y las familias, tuvo que enfocarse en dar a conocer una versión de lo que estaba ocurriendo diferente a la que los medios mayoritarios contaban. Así surgió *Prensa Comunitaria* (www.comunitariapress.wordpress.com), un espacio que busca dar esa otra visión mediante fuentes locales, entrevistas directas, artículos críticos, reportajes fotográficos, etcétera.

En tres años seguramente esta página es el mayor logro que se ha conseguido, pues se ha convertido en una referencia para conocer sobre los temas de movilización y criminalización en el país. Pero no ha sido el único logro, con todo, un pequeño equipo ha conseguido hacer dos publicaciones complementarias: *Las voces del río*, elaborada a partir de las historias de los perseguidos políticos de Barillas, y *Dinámicas de despojo y resistencia*, un análisis sobre los procesos de movilización y criminalización de las comunidades.⁶ En el pasado Congreso Internacional Pueblos Indígenas de América Latina, siglos XIX-XXI, celebrado en octubre de 2013 en Oaxaca, organizamos una mesa titulada “Comunidades y Estado en Guatemala: una relación conflictiva”, en la que participamos académicos y líderes comunitarios. También hay algunos capítulos de libro y artículos que están por publicarse. Este mismo texto forma parte de todos esos procesos surgidos del trabajo común y la reflexión colectiva, sin ellos no se podría entender.

Todo esto no ha sido ni es fácil, el recuento de logros esconde la tensión y las dificultades cotidianas, sobre todo para el resto del equipo que está en Guatemala. Nos ha tocado vivir de cerca los efectos de la represión —visitas

a cárceles, audiencias judiciales, muerte de amigos— y sufrir amenazas de militares retirados y campañas de difamación y agresión para desacreditar el trabajo que estábamos haciendo, por envidias, intereses económicos y espacios políticos.

El futuro

En Guatemala se está dando un proceso político que nos ayuda a entender el momento en que se encuentra América Latina y el papel que algunos jugamos en él. Después de una guerra y una experiencia devastadora de genocidio y actualizando formas históricas, muchas comunidades —sobre todo, pero no únicamente, indígenas— se están oponiendo a un “desarrollo” que una vez más les deja fuera y amenaza lo poco que les queda: el mundo de vida más cercano. En este proceso se van transformando las mismas comunidades, acorde al contexto de globalización y política neoliberal, pero también a las nuevas formas de entenderse como pueblos indígenas y como ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos.

En la defensa de lo más inmediato, estas comunidades están forjando una alternativa para todo el continente. Se han convertido en la base de una propuesta política que pretende dotar de contenido participativo a una democracia moribunda y que busca nuevas formas de articulación con el Estado desde el reconocimiento de sus estructuras históricas como espacios legítimos de representación y actuación. Por eso es mucho lo que nos jugamos. Si el Estado logra ahogarlas, nos quedaremos sin una importante alternativa a este capitalismo destructivo.

⁶ Ambas publicaciones están disponibles y esperando ser leídas en la página de prensa comunitaria <www.comunitariapress.wordpress.com>.



Autoridades indígenas de Totonicapán. Foto: Quirmy de León.



Marcha de la Coordinadora Nacional Indígena Waqib K'ej, Ciudad de Guatemala. Foto: Quirmy de León.

Bibliografía

BASTOS, SANTIAGO

2013 "La emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos. Los mayas en Guatemala: la construcción de un actor y una acción política", en Carlos Figueroa y Arturo Taracena (coords.), *Historia contemporánea de Guatemala*, vol. III, Guatemala, Flacso-Guatemala.

BASTOS SANTIAGO y QUIMY DE LEÓN

2014 *Dinámicas de despojo y resistencia en Guatemala. Comunidades, Estado, empresas*, Guatemala, Diakonía/Colibrí Zurdo. Bastos, Santiago, Quirmy de León, Nelton Rivera, Dania Rodríguez y Francisco Lucas.

(En prensa) "Despojo, movilización y represión en Santa Cruz Barillas", los autores son: Santiago Bastos, Quirmy de León, Dania Rodríguez, Nelton Rivera, Francisco Lucas y Julián López. *Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en Guatemala*, Guatemala, Flacso/Fundación Constelación.

CAMUS, MANUELA

2008 *La sorpresita del Norte. Migración internacional y comunidad en Huehuetenango*, Guatemala, INCEDES/CEDFOG.

CASAUS, MARTA

2008 *Genocidio: la máxima expresión del racismo en Guatemala*, Guatemala, F&G Editores (Cuadernos del presente imperfecto, núm. 4).

CEH

1999 *Guatemala, memoria del silencio*, Guatemala, informe presentado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

EKERN, STERN

2011 *Chuwi Meq'enJa'. Comunidad y liderazgo en la Guatemala k'iche'*, Guatemala, Cholsamaj.

GARIBAY, CLAUDIO

2010 "Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual", en *Ecología política de la minería en México*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades-UNAM.

HARVEY, DAVID

2004 "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión", disponible en <<http://es.scribd.com/doc/16303286/Harvey-David-El-nuevo-imperialismo-Acumulacion-por-desposicion-2004>>.

INE

2011, Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2011, Guatemala, Instituto Nacional de Estadística.

OIM

2013 Perfil Migratorio de Guatemala 2012, Guatemala, Organización Internacional para las Migraciones

PNUD

2014 "El ascenso del sur: progreso humano en un mundo diverso", Informe de desarrollo humano 2013, México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

RASCH, ELIZABETH

2012 "Transformations in Citizenship. Local Resistance against Mining Projects in Huehuetenango (Guatemala)", en *Journal of Developing Societies*, vol. 28(2), pp. 159-184.

SIEDER RACHEL y CARLOS YURI FLORES

2012 Dos justicias: coordinación interlegal e intercultural en Guatemala, Guatemala, F&G Editores, Casa Comal y Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

SOLANO, LUIS

2005 *Guatemala: petróleo y minería en las entrañas del poder*, Guatemala, Inforpress Centroamericana.

TORRES-RIVAS, EDELBERTO

2013 *Revoluciones sin cambios revolucionarios: ensayos sobre la crisis en Centroamérica*, Guatemala, F&G Editores.

TRENTAVIZI, BÁRBARA

y ELEUTERIO CAHUEC

2012 "Las consultas comunitarias de buena fe y las prácticas ancestrales comunitarias indígenas en Guatemala" (informe), Guatemala, CIRMA-OACNUDH.

YAGENOVA, SIMONA

2012 *La industria extractiva en Guatemala: políticas públicas, derechos humanos y procesos de resistencia popular en el periodo 2003-2001*, Guatemala, Flacso.